



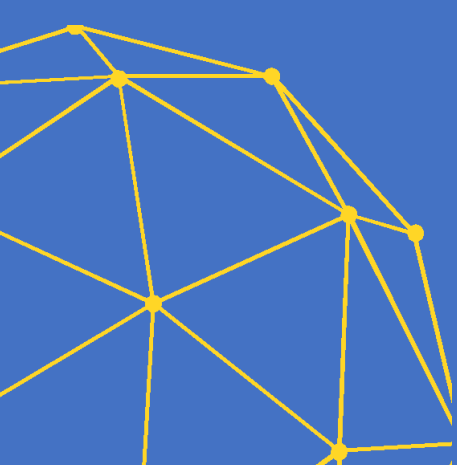
Centro UC
CLAPES UC
Centro Latinoamericano de
Políticas Económicas y Sociales

EL ESTALLIDO SIGUE ENVEJECECIENDO MAL

16 de octubre, 2025

AUTORES

Carmen Cifuentes Véliz
Felipe Larraín Bascuñán



INFORME

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe actualiza el análisis publicado en octubre de 2024, elaborado con motivo de los cinco años del denominado estallido social. En esta nueva edición, se examina la evolución socioeconómica de Chile a seis años del 18 de octubre de 2019, a partir de los datos más recientes disponibles – en su mayoría a diciembre de 2024.

La evidencia muestra que, en comparación con el período previo a dicho evento, Chile enfrenta hoy un escenario significativamente más desfavorable en múltiples dimensiones: menor crecimiento económico, productividad estancada, un mercado laboral debilitado, deterioro fiscal estructural y una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes.

Tras la pandemia, el país experimentó una recuperación parcial, aunque insuficiente para retomar la senda de expansión observada entre 1990 y 2013, periodo durante el cual el PIB creció en promedio 5,3% anual. En contraste, el crecimiento promedio proyectado para el actual gobierno se sitúa en torno al 1,9% anual, uno de los más bajos desde el retorno a la democracia. Si bien el PIB repuntó un 2,6 % en 2024, y se prevé una expansión de 2,5% para 2025, la inversión privada y la productividad continúan mostrando debilidad, limitando las perspectivas de crecimiento sostenido.

La productividad total de factores (PTF) acumula más de una década de estancamiento. Desde 2014, el índice PTF-A ha caído en promedio un 0,3% anual, mientras que la productividad media laboral se mantuvo en terreno negativo hasta fines de 2024.

El mercado laboral sigue mostrando una fragilidad persistente. La tasa de desempleo alcanzó el 8,6% en el trimestre móvil junio–agosto de 2025, completando más de 30 trimestres móviles por encima del 8%. Faltan más de 270 mil empleos para recuperar los niveles previos a la pandemia, y el empleo formal privado continúa rezagado. Además, uno de cada tres desempleados lleva más de un año buscando trabajo, lo que evidencia un preocupante aumento del desempleo de larga duración.

En el ámbito fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advierte un creciente estrés estructural. El déficit estructural alcanzó -3,2% del PIB en 2024, mientras que la deuda neta llegó a 42,3% del PIB. El país enfrenta holguras fiscales negativas proyectadas por varios años y una sostenibilidad presupuestaria en riesgo, condicionada por gastos comprometidos superiores a los ingresos estructurales.

En materia de seguridad ciudadana, el deterioro ha sido profundo. La tasa de homicidios alcanzó 6 por cada 100 mil habitantes en 2024, una de las cifras más altas registradas en la historia reciente del país. El Índice Paz Ciudadana 2025 evidencia que el temor al delito se mantiene elevado, mientras que la ENUSC 2024 confirma que cerca de un 90% percibe un aumento de la delincuencia, el nivel más alto en casi dos décadas.

En consecuencia, Chile se encuentra hoy en una posición más frágil que antes del estallido, y las prioridades ciudadanas han cambiado. Según la Encuesta CEP 2025, “seguridad y orden público” y

“crecimiento económico” son ahora las principales preocupaciones, desplazando a la igualdad de oportunidades que dominaba hace una década.

En resumen, el estallido social sigue envejeciendo mal: lejos de resolver los problemas que se le atribuyeron como origen, Chile enfrenta hoy un escenario de menor crecimiento, productividad y empleo, junto a un clima de inseguridad más profundo que en el periodo previo al estallido.

I. INTRODUCCIÓN

Este informe actualiza el análisis publicado en octubre de 2024, con motivo de los cinco años del denominado estallido social (Cifuentes y Larraín, 2024).¹ Han transcurrido ya seis años desde los acontecimientos de octubre de 2019, un periodo marcado por protestas masivas, episodios de violencia y una profunda agitación social y política. En rigor, más que un estallido de malestar general, se trató principalmente – aunque no exclusivamente – de un estallido de violencia.

Las manifestaciones se originaron aparentemente a raíz del aumento en las tarifas del transporte público en Santiago, pero rápidamente se expandieron bajo la consigna “*no son 30 pesos, son 30 años*”, expresión que sintetizaba el descontento con las tres décadas de desarrollo posterior al retorno a la democracia, percibidas por muchos como un período de avances desiguales y de persistencia de brechas sociales, económicas e institucionales.

Durante las primeras jornadas, más de 30 estaciones de metro fueron incendiadas o atacadas, se produjeron saqueos, daños a establecimientos comerciales y enfrentamientos entre civiles y fuerzas policiales. En cuestión de días, las protestas adquirieron un carácter masivo, con multitudes congregadas a lo largo de todo el país, y el debate público se amplió hacia demandas de carácter estructural: mayor igualdad, acceso a salud y educación de calidad, pensiones dignas y reformas institucionales.

Entre las principales exigencias surgió la redacción de una nueva Constitución, vista por amplios sectores como un paso necesario para canalizar institucionalmente las demandas ciudadanas. Así, tras 28 días de movilizaciones y hechos de violencia, los partidos políticos firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que dio origen a un proceso constituyente sin precedentes en la historia reciente de Chile.

Sin embargo, cuatro años y dos procesos constitucionales después, ambos rechazados en plebiscitos nacionales, el país no logró materializar dicho cambio. Estos procesos consumieron importantes recursos políticos e institucionales, desviando la atención de las prioridades ciudadanas, en un contexto además marcado por el impacto socioeconómico de la pandemia y la pérdida de dinamismo económico.

¹ Cifuentes, C., & Larraín, F. (2024). *El estallido envejece mal*. Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC).

El presente informe ofrece un análisis actualizado de la evolución de las principales variables socioeconómicas en este período, con el propósito de evaluar el estado actual de las demandas sociales que supuestamente dieron origen al estallido, y determinar en qué medida el país ha avanzado (o retrocedido) desde entonces.

II. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE CHILE DESDE EL ESTALLIDO

A continuación, presentaremos la evolución de distintas variables desde 2019 en adelante, con el propósito de identificar si se han producido mejoras vinculadas a las demandas sociales que dieron origen al estallido. Para ello, es importante considerar que los datos de los años 2020 y 2021 reflejan los devastadores efectos socioeconómicos de la pandemia.

1. Economía

En 2019 la economía chilena creció un 0,7%, cifra inferior al promedio registrado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, este resultado se vio fuertemente influido por la contracción interanual observada durante el cuarto trimestre de dicho año, periodo en el que se desarrolló la fase más aguda del estallido. De hecho, el crecimiento interanual promedio para los primeros tres trimestres de 2019 fue de 1,8%, con una importante recuperación en el tercer trimestre, justo antes del estallido (Figura 1).

Figura 1. Variación interanual PIB real, frecuencia trimestral, periodo 2018-2019 (%).



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile.

La llegada de la pandemia del COVID-19 desencadenó restricciones sin precedentes para contener su propagación, lo que provocó una disminución significativa de la actividad económica en varios sectores. Esta situación derivó en una gran contracción económica. En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó una caída del 6,1%, superando ampliamente las caídas observadas durante las crisis financieras anteriores.

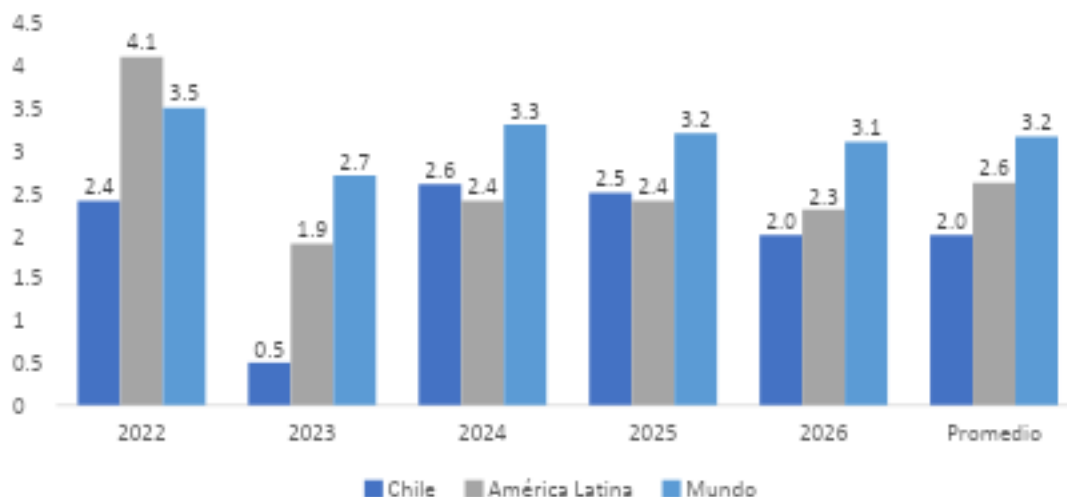
La pandemia afectó de manera generalizada y negativa a la economía chilena, reflejándose en una serie de variables adicionales al PIB. La inversión, por ejemplo, se contrajo un 10,8% interanual, marcando una de las mayores caídas registrada en la serie histórica. Asimismo, el empleo se vio gravemente afectado por las restricciones de movilidad impuestas para contener la propagación del virus.

En el punto más álgido de la pandemia, se perdieron más de 1,8 millones de empleos en términos interanuales, al mismo tiempo, cerca de 1,5 millones de personas salieron del mercado laboral. Como resultado, tanto la tasa de ocupación como la tasa de participación laboral alcanzaron sus mínimos históricos.

Es fundamental contextualizar el desempeño económico de Chile en los años posteriores a la pandemia, especialmente en 2022 y 2023. En 2022, el PIB experimentó una expansión del 2,4%, lo que marcó un avance positivo, aunque moderado en comparación con el año anterior. Sin embargo, en 2023, el crecimiento se redujo drásticamente, alcanzando apenas un 0,5%, lo que indica prácticamente un estancamiento económico. En 2024 se observó un repunte, con un crecimiento de 2,6%, y el FMI proyecta una cifra similar para 2025 (2,5%), pero inferior para 2026 (2%). Estas cifras siguen siendo insuficientes para que el país logre un verdadero despegue económico. De hecho, se mantienen muy por debajo del promedio de crecimiento registrado entre 1990 y 2013, que alcanzó 5,1%.

Es importante destacar que esta desaceleración no puede atribuirse únicamente a los efectos residuales de la pandemia. La comparación internacional muestra que, desde 2022, Chile ha crecido significativamente menos que el promedio mundial, y solo superaría a la región en 2024–2025 (Figura 2). Esto evidencia la necesidad de abordar los desafíos estructurales que limitan el crecimiento y de fortalecer la resiliencia económica del país frente a futuras adversidades.

Figura 2. Variación interanual PIB real periodo 2022-2025, Chile, América Latina y el mundo.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y el Fondo Monetario Internacional (WEO octubre 2025).

De hecho, las proyecciones tanto del Banco Central como del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el crecimiento económico de Chile indican una recuperación gradual para 2025, pero una desaceleración para 2026. Así, el crecimiento promedio durante el periodo del Presidente Gabriel Boric se situaría en un 1,9%, lo que representa el segundo peor resultado –después de Bachelet II– desde el retorno a la democracia².

Adicionalmente, han empeorado las estimaciones del crecimiento de la inversión para el periodo 2024-2026, producto de la debilidad de la inversión de los sectores no mineros. Se prevé una contracción en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) para el presente año y un crecimiento del 5,1% para 2025. Con ello, la inversión en el actual gobierno se situaría como la segunda más baja desde 1990, con un crecimiento promedio anual de apenas un 1,5%.

En resumen, la economía chilena enfrenta un deterioro significativo en términos de crecimiento económico e inversión en comparación con el período anterior al estallido social. El debilitamiento del consumo y la inversión son factores clave que han contribuido a esta situación, con tasas de expansión o contracción que están muy por debajo de los niveles observados en 2019 y de los promedios históricos.

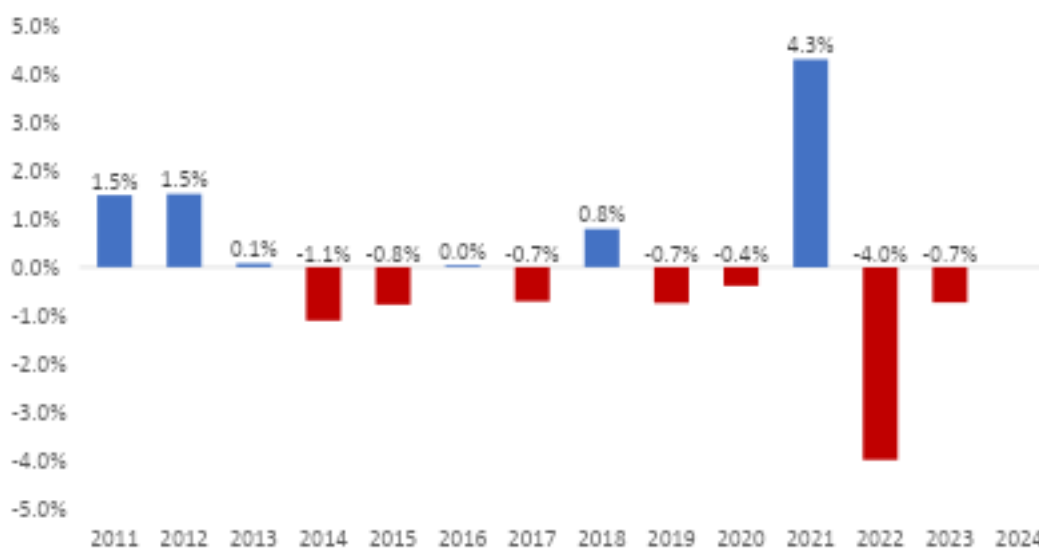
² Si se consideran las proyecciones oficiales de crecimiento, el promedio del actual gobierno alcanzaría un 1,9%, apenas por encima del registrado durante la segunda administración de Michelle Bachelet (1,8%).

2. Productividad

La evolución de la productividad en Chile ha enfrentado desafíos crecientes desde 2014, como evidencian los índices elaborados por Clapes UC. Hasta 2013, la productividad de la economía —medida tanto por la productividad total de factores (PTF) como por la productividad media laboral (PMeL)— mostraba, en general, incrementos interanuales. En particular, el índice PTF-A (sin ajustes a los factores productivos) creció en promedio un 1,3% anual en ese periodo. Sin embargo, desde 2014 esta trayectoria cambió: la PTF-A ha experimentado una contracción promedio de 0,7% anual.

Por su parte, el índice PTF-D, que ajusta el capital y el trabajo para captar su calidad y grado de utilización, disponible desde 2010, también evidenció una tendencia decreciente. En los años recientes ha mostrado crecimientos negativos, y para 2024 registró una variación nula (Figura 3).

Figura 3. Crecimiento anual de la PTF (trabajo y capital corregidos).



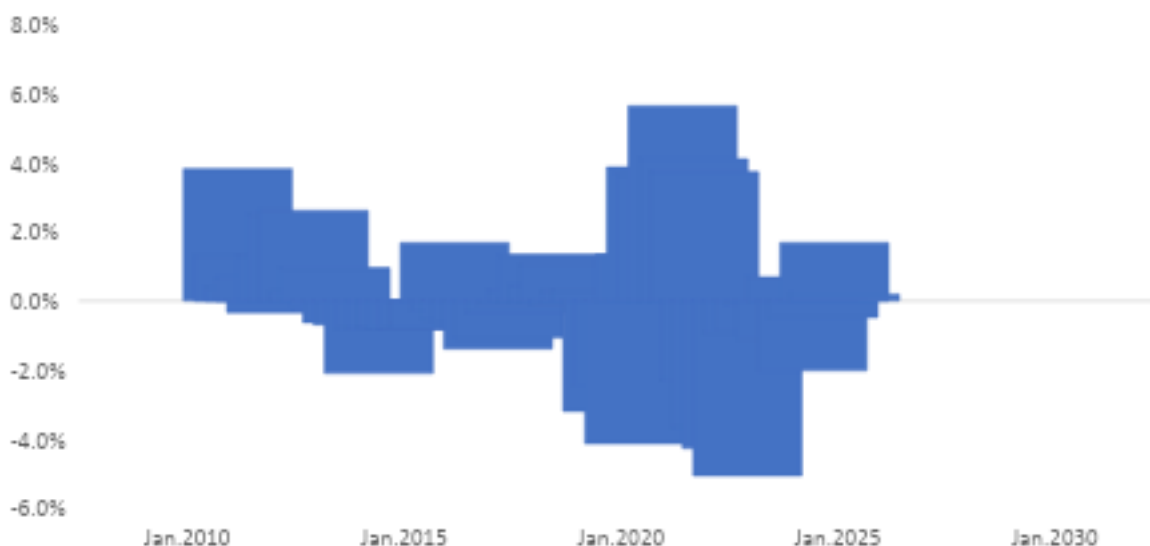
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Clapes UC.

Cuando comparamos la situación actual con la previa al estallido social, observamos que incluso antes de octubre de 2019 la PTF ya presentaba contracciones, aunque de menor magnitud que las registradas desde 2022. En esos años previos mantenía una tendencia positiva en algunos sectores clave. Desde el estallido social, y excluyendo 2021, cuando la base de comparación post-COVID fue atípica, ha predominado una desaceleración prolongada de la productividad, con contracciones más intensas.

De hecho, en 10 de los últimos 14 trimestres la productividad se ha contraído, resultando en un crecimiento promedio cercano a cero desde el año 2020. Esto evidencia un debilitamiento en la eficiencia con que se emplean los factores productivos.

No obstante, hay indicios recientes de un leve repunte. En el segundo trimestre de 2025, el índice PTF-D (que ajusta tanto capital como trabajo para captar su calidad y utilización) registró un incremento interanual de 1,8%, acumulando tres trimestres consecutivos de alzas. Este comportamiento sugiere que, aunque la trayectoria de productividad ha sido débil y con frecuentes caídas, podría haber una recuperación moderada este año (Figura 4).

Figura 4. Crecimiento anual de la PTF (trabajo y capital corregidos), frecuencia trimestral.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Clapes UC.

Asimismo, la productividad media laboral había mostrado un desempeño negativo de manera sostenida desde 2019 hasta el tercer trimestre de 2024, reflejando una menor eficiencia promedio por trabajador en la producción nacional. Este retroceso evidenció la dificultad de la economía chilena para generar mayor valor agregado por persona ocupada, incluso en periodos de recuperación del empleo.

No obstante, en el segundo trimestre de 2025 la productividad media laboral registró un aumento interanual de 3,1%, completando tres trimestres consecutivos de crecimiento. Este repunte se explica principalmente por el incremento del PIB, mientras que la variación interanual del empleo se mantuvo

prácticamente nula, lo que sugiere una mejora puntual en la eficiencia productiva más que un aumento en la ocupación.

En conclusión, la evolución de la productividad en Chile desde octubre de 2019 hasta la actualidad ha estado caracterizada por un prolongado estancamiento, con caídas recurrentes en los índices de productividad total de factores (PTF) y en la productividad media del trabajo. Este deterioro ha limitado la capacidad del país para sostener un crecimiento económico más dinámico.

Sin embargo, los datos más recientes de 2025 muestran mejoras en el margen. Aunque aún es pronto para hablar de un cambio estructural, estos avances sugieren una recuperación parcial en la eficiencia del uso de los factores productivos, luego de varios años de contracciones sostenidas.

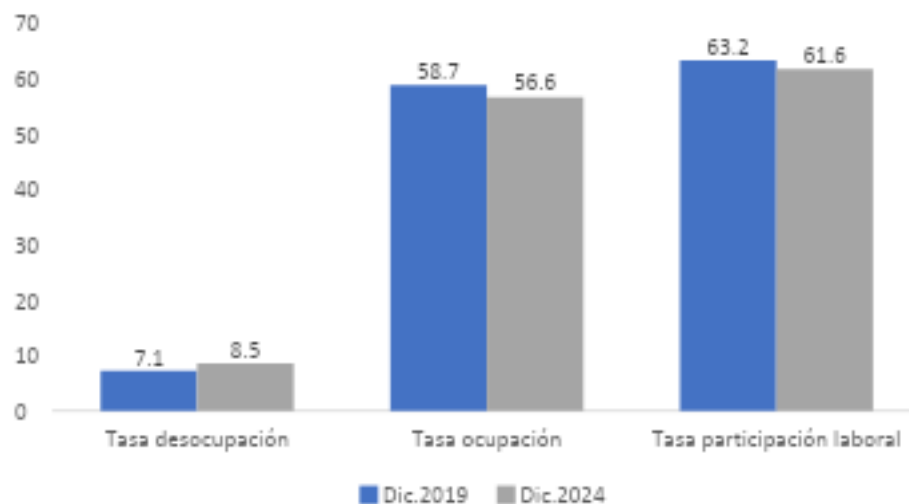
3. Mercado laboral

El deterioro del mercado laboral en Chile, especialmente a partir de 2023, evidencia el debilitamiento de la actividad económica y los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de empleo. Tras un breve período de recuperación durante el primer semestre de 2022, caracterizado por una intensa creación de puestos de trabajo que incluso superó el crecimiento de la fuerza laboral, la tendencia cambió rápidamente.

El estancamiento en la generación de empleo y la insuficiente absorción del aumento de la fuerza de trabajo tras el fin de la pandemia derivaron en un incremento sostenido del desempleo, que alcanzó 8,6% en el trimestre móvil junio–agosto de 2025. Si bien esta cifra representa la primera caída interanual del año, sigue siendo elevada en perspectiva histórica, superando ampliamente el promedio de 6,9% registrado entre 2010 y 2019. De hecho, el desempleo ha permanecido por sobre el 8% durante más de 30 trimestres móviles consecutivos.

A pesar de ciertos avances en la recuperación de la tasa de ocupación desde el punto más bajo de la pandemia, el mercado laboral no ha logrado recomponerse completamente: faltan más de 270 mil empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria. En la actualidad, la tasa de ocupación se mantiene en niveles comparables a los de 2012, lo que refleja un retroceso significativo en términos de empleo y de aprovechamiento del potencial laboral del país (Figura 5).

Figura 5. Tasa de desocupación, tasa de ocupación y tasa de participación laboral, diciembre de 2019 vs. diciembre de 2024 (%).



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Cabe mencionar que también ha empeorado la situación del empleo formal en el sector privado. En los años anteriores al estallido, el crecimiento del empleo estaba impulsado principalmente por el sector privado formal, con una expansión sostenida del trabajo asalariado y una participación acotada del empleo público e informal. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en los años posteriores.

El empleo público, que había actuado como amortiguador durante la pandemia, comenzó a retroceder desde 2024. En contraste, el crecimiento reciente proviene del empleo asalariado privado, pero especialmente del segmento informal, que aumentó 7,3% interanual, mientras que el empleo formal del mismo sector creció 3%.

Pese a estas cifras positivas en el margen, los registros administrativos revelan una realidad menos alentadora: el número de cotizantes del Seguro de Cesantía continúa siendo 280 mil inferior al de diciembre de 2022, y los despidos por necesidades de la empresa alcanzaron 253 mil en el primer semestre de 2025, la cifra más alta desde la pandemia.

A este rezago se suma un aumento del desempleo de larga duración, que refleja las dificultades crecientes para reinsertarse laboralmente. En el trimestre junio–agosto de 2025, uno de cada tres desocupados lleva más de un año buscando trabajo, proporción que duplica la registrada antes del estallido social.

En conjunto, estos indicadores confirman que el mercado laboral chileno atraviesa un proceso de estancamiento estructural, con una menor capacidad para generar empleo formal y de calidad, una alta persistencia del desempleo prolongado y un incremento del subempleo.

A más de cinco años del estallido social, Chile mantiene un mercado laboral más frágil, menos inclusivo y con menor capacidad de recuperación sostenible. En consecuencia, puede concluirse que la situación actual del empleo es más deteriorada que en el período previo al estallido social, debido al estancamiento en la creación de puestos de trabajo —especialmente en el sector formal privado—, lo que se ha traducido en un mayor desempleo, una menor ocupación y un incremento del subempleo.

4. Situación Fiscal

El impacto económico de la pandemia del Covid-19 en Chile fue significativo, lo que llevó al gobierno a implementar medidas fiscales sin precedentes para hacer frente a la crisis sanitaria y mitigar sus efectos en la población y la economía. Estas medidas incluyeron un aumento sustancial en el gasto público, especialmente en transferencias masivas realizadas a los hogares en forma de bonos o subsidios, que totalizaron cerca de US\$35 mil millones.

Este aumento del gasto público provocó un deterioro significativo en la posición fiscal de Chile. En particular, el déficit fiscal del Gobierno Central se incrementó considerablemente, alcanzando un 7,7% del PIB en el año 2021. Este déficit efectivo se acompañó de un déficit estructural del 10,7% del PIB, reflejando un desequilibrio de largo plazo en las cuentas públicas. Sin embargo, este aumento del déficit fue transitorio.

Además, la deuda bruta del Gobierno Central aumentó significativamente, llegando al 36,3% del PIB en 2021, su nivel más alto desde 1991. Ello representó un incremento de 8 puntos porcentuales desde 2019, lo que subraya el impacto del aumento del gasto y la disminución de los ingresos durante la crisis.

Para abordar estos desequilibrios fiscales, en 2022 se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron recortes en los bonos y subsidios asociados a la emergencia del Covid-19, como el Ingreso Familiar de Emergencia. Estas medidas, junto con un aumento de los ingresos tributarios netos debido a una mayor recaudación, permitieron al Gobierno Central cerrar el año con un superávit fiscal del 1,1% del PIB, el primero desde 2012 (aunque muy influido por la contribución fiscal del litio, que tuvo precios excepcionales ese año).

Sin embargo, a pesar de este ajuste, el balance fiscal volvió a registrar déficit (Figura 6). Las proyecciones fiscales de mediano plazo también resultan preocupantes, ya que indican que se espera un déficit estructural del 1,5% del PIB en 2025, que se reduciría a un -0,8% del PIB en 2026. En paralelo, la deuda pública seguiría aumentando hasta un 43% en 2026, un nivel cercano al máximo prudente del 45% del PIB.

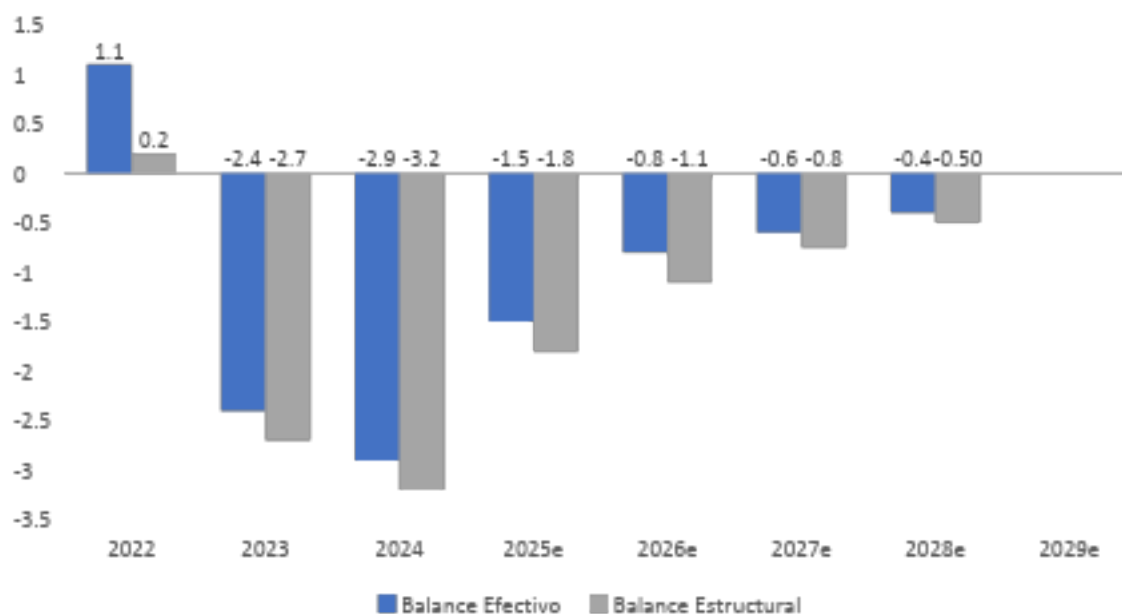
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha ratificado que Chile enfrenta un nivel de estrés fiscal significativo y estructural, resultado de saldos negativos persistentes, deuda creciente y gastos comprometidos que superan los ingresos permanentes. En 2024, el déficit estructural alcanzó -3,2 % del PIB, desviándose en

1,3 puntos porcentuales de la meta oficial. La deuda neta escaló a 37,7 % del PIB, y el CFA advierte que el país opera bajo condiciones de holgura fiscal negativa proyectada para varios años.

Las medidas anunciadas para 2025 son consideradas insuficientes. Peor aún, las proyecciones de ingresos están bajo presión: en el primer semestre la recaudación creció solo 4,3%, muy por debajo del 7,6% estimado. El CFA estima que las holguras negativas promediarán 0,4% del PIB anual entre 2026 y 2029, elevando el riesgo de que la regla fiscal colapse o se debilite ante nuevas crisis.

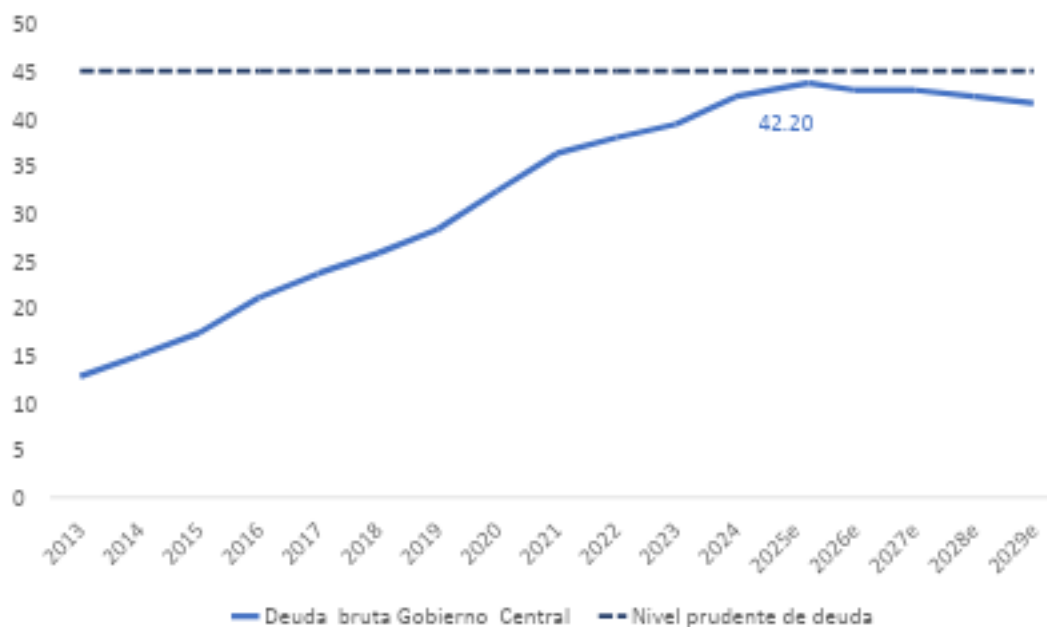
En resumen, la posición fiscal de Chile enfrenta desafíos importantes en términos de deuda, déficit y sostenibilidad, lo que refuerza la necesidad de aplicar políticas fiscales prudentes y de avanzar en medidas que fortalezcan la situación fiscal a largo plazo.

Figura 6. Balance fiscal de Chile (% del PIB).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.

Figura 7. Deuda bruta del Gobierno Central de Chile (% del PIB).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.

5. Bienestar social

El impacto de la pandemia del Covid-19 en Chile fue significativo en términos de pobreza y desigualdad de ingresos. Después de décadas de avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la crisis sanitaria revirtió estas tendencias positivas y llevó a un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad.

La tasa de incidencia de pobreza en el país subió por primera vez desde 1990, alcanzando un 10,8% en el año 2020, lo que representó un incremento de 2,1 puntos porcentuales con respecto al 8,7% registrado en 2017. Esta alza fue especialmente notable en la pobreza extrema, que aumentó del 2,3% al 4,3% entre 2017 y 2020.

Además, se observó un deterioro en la desigualdad de ingresos durante este período. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, creció tanto para los ingresos autónomos como para los ingresos monetarios. Por ejemplo, en 2017, el coeficiente de Gini para los ingresos autónomos era de 0,51, y para los ingresos monetarios era de 0,49. Estas cifras aumentaron a 0,53 y 0,51, respectivamente, en 2020.

Otros indicadores de desigualdad de ingresos también mostraron retrocesos significativos. Por ejemplo, el índice 20/20, que compara los ingresos del 20% de hogares más ricos con el 20% más pobre, aumentó drásticamente de 11,7 veces en 2017 a 23,8 veces en 2020. Estos resultados indican que la pandemia

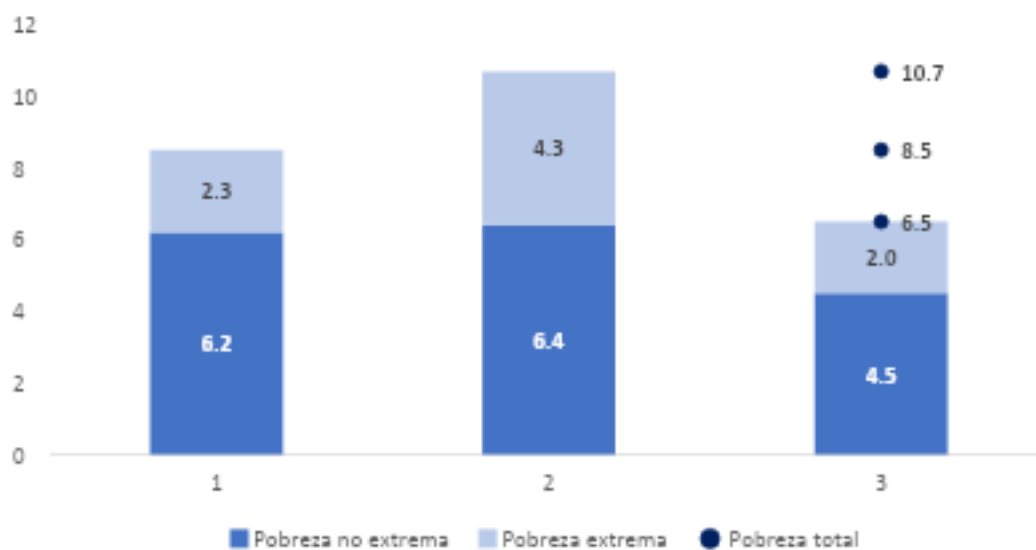
exacerbó las brechas sociales en Chile, afectando de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos y aumentando la desigualdad económica en el país.

Según los datos de la Encuesta Casen 2022, se observó una disminución en la pobreza por ingresos en Chile, pasando del 10,8% al 6,5%. La pobreza extrema también disminuyó notablemente, cayendo del 4,3% al 2%. Es importante destacar que, debido a los cambios metodológicos introducidos en la encuesta, se recomienda comparar estos resultados con los obtenidos en 2017 para tener una evaluación más precisa de la evolución de la pobreza en el país.

En comparación con 2017, la pobreza por ingresos se redujo significativamente entre 2017 y 2022, lo que sugiere una mejora en las condiciones económicas de los hogares. En cuanto a la desigualdad de ingresos, se observó una leve disminución en el coeficiente de Gini del ingreso autónomo, lo que indica una leve reducción en la desigualdad de ingresos.

En resumen, mientras que los datos de la Encuesta Casen 2022 sugieren una disminución en la pobreza por ingresos y una leve reducción en la desigualdad de ingresos, es necesario realizar un análisis más detallado y considerar otros indicadores para tener una imagen completa de la evolución socioeconómica en Chile.

Figura 8. Tasa de pobreza total, extrema y no extrema en Chile (%).



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF).

Tabla 1: Coeficiente de Gini, índice 20/20 e índice 10/10 en Chile.

	2017	2020	2022
Coeficiente de Gini	0,496	0,527	0,491
Índice 10/10	10,9	21,9	12,9
Índice 20/20	2,3	3,3	2,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDSF.

Los datos muestran que la reducción en la tasa de pobreza en Chile entre 2017 y 2022 se debió principalmente a tres factores clave: el aumento en los subsidios monetarios gubernamentales, el incremento en el ingreso por concepto de alquiler imputado, y la disminución en el tamaño promedio de los hogares.

La mayor contribución a la reducción de la pobreza provino de los subsidios monetarios implementados por el gobierno para enfrentar los impactos económicos adversos de la pandemia en los hogares. Políticas como el IFE Laboral, el Subsidio Protege, el bono Chile Invierno, la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) jugaron un papel crucial en este sentido. Además, los retiros de fondos previsionales también contribuyeron a esta mejora.

Es necesario recalcar que la disminución de la pobreza, impulsada principalmente por el aumento de los subsidios gubernamentales, no necesariamente indica una mejora sustancial en el bienestar general de la población a largo plazo. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la misma, como el debilitamiento del mercado laboral y la falta de oportunidades económicas, para lograr una mejora sostenible en el bienestar de la población a largo plazo.

6. Seguridad ciudadana

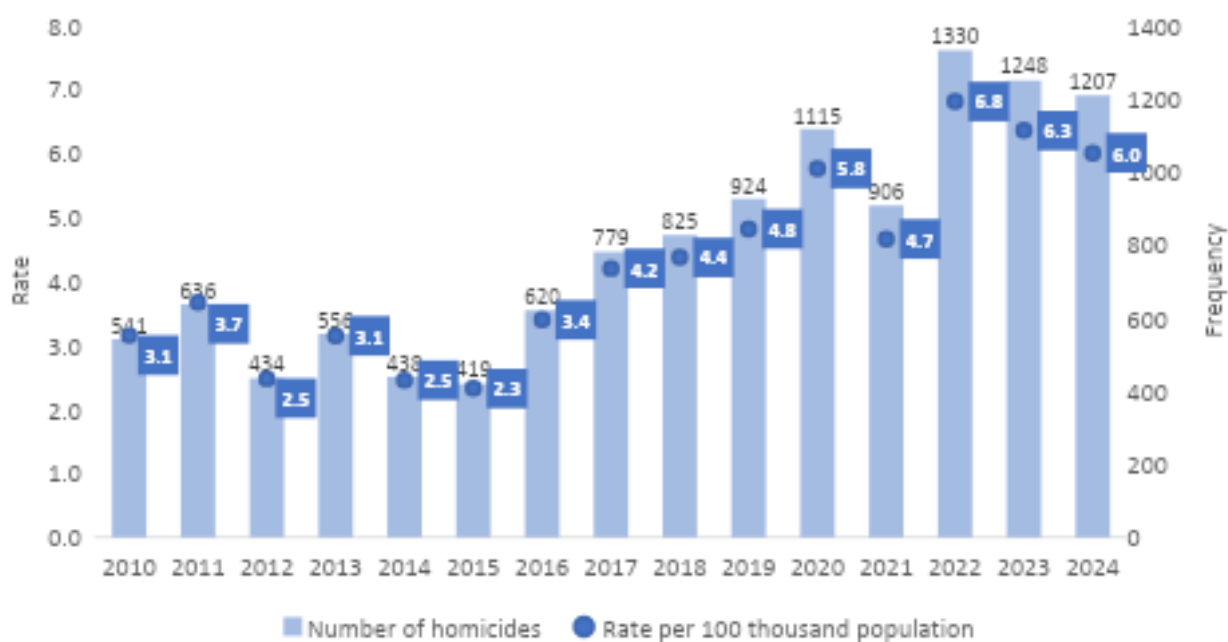
La seguridad ciudadana ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, evidenciado por un aumento considerable en la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad, alcanzando niveles históricos máximos. Durante los años 2020 y 2021, las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia contribuyeron a una notable disminución en las tasas de delitos. De hecho, en ambos años, las cifras de casos policiales relacionados con delitos de mayor connotación social (DMCS) alcanzaron sus niveles más bajos desde comienzos de los años 2000.

No obstante, mientras que la tasa de homicidios aumentó considerablemente en 2020, registró una reducción en 2021. Sin embargo, estas mejoras resultaron transitorias, ya que a partir de 2022 se observó una reversión de la tendencia. Aunque se ha registrado un incremento en los casos policiales de DMCS en comparación con el periodo 2020-21, la tasa por cada cien mil habitantes sigue siendo inferior a los niveles

previos al estallido social. Con todo, los datos revelan un aumento alarmante en la tasa de homicidios, alcanzando un máximo histórico de 6,3 homicidios por cada cien mil habitantes en 2022 (Figura 9).

A este incremento se suma un notable aumento en la proporción de victimarios desconocidos, que pasaron del 25,8% en 2018 al 41,6% en 2023. Este crecimiento del factor del imputado desconocido sugiere un panorama más complejo, posiblemente indicativo de una mayor presencia del denominado "crimen organizado". Además, se ha observado un aumento en la violencia y el uso de armas de fuego en la perpetración de estos delitos, lo que subraya la gravedad de la situación.

Figura 9. Tasa de homicidios cada cien mil habitantes, periodo 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEAD.

Con el alza en la perpetración de delitos más violentos y la presencia creciente de elementos relacionados con el crimen organizado, el temor a la delincuencia y la sensación de inseguridad han experimentado un notable incremento.

En el Índice Paz Ciudadana 2025, el temor al delito se mantiene elevado, aunque muestra una leve moderación respecto del máximo alcanzado en 2023. El 24,3% de las personas declara un nivel alto de inseguridad, por debajo del 30,5% registrado en septiembre de 2023. Además, un 23,8% de los encuestados considera “muy o bastante probable” ser víctima de un homicidio en los próximos doce meses, mientras que un 13,2% afirma haber presenciado o conocido homicidios por ajuste de cuentas en su entorno barrial.

Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2024) confirma que la percepción de aumento de la delincuencia continúa en niveles históricamente altos: un 87,7% de la población considera que los delitos han aumentado en el país durante el último año. Asimismo, el 56,6% de las personas declara sentirse expuesto al delito, la proporción más alta desde 2015. En cuanto a victimización, el 8,5% de los hogares reportó haber sufrido delitos violentos en 2024, frente al 8,2% del año anterior.

En síntesis, la seguridad ciudadana en Chile atraviesa su peor momento en décadas. Tras la caída temporal de la criminalidad durante la pandemia, el país ha experimentado un repunte sostenido de los delitos violentos, acompañado de un aumento histórico en la tasa de homicidios con una mayor presencia del crimen organizado. Paralelamente, las encuestas muestran un deterioro en la percepción de seguridad. En conjunto, estos indicadores confirman que la violencia y el temor se han consolidado como rasgos estructurales del nuevo escenario de inseguridad que enfrenta el país.

III. CONCLUSIONES

Un análisis desapasionado de las cifras permite cuestionar la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, surgida durante el estallido social de octubre de 2019. Los datos no respaldan la idea implícita en esa frase: que entre el retorno a la democracia y 2019 el país no habría experimentado avances sociales, económicos ni institucionales significativos. Por el contrario, la evidencia muestra que durante esas tres décadas Chile logró progresos sustantivos en múltiples dimensiones.

En el ámbito económico, el PIB real se triplicó y el PIB per cápita se duplicó. Hasta 2013, el país mantuvo un crecimiento promedio del 5,1%, superando el desempeño mundial y regional. Este dinamismo estuvo acompañado por una fuerte expansión de la inversión, que creció en promedio un 8,8% anual hasta ese año, y por una mejora sostenida en el mercado laboral, con aumentos tanto en la participación como en la tasa de ocupación. Destaca especialmente el período 2010–2011, cuando se crearon más de 700 mil empleos. En paralelo, se consolidó una gestión fiscal responsable, con reglas institucionalizadas que otorgaron estabilidad macroeconómica y credibilidad internacional.

En el plano social, se registraron avances notables en bienestar y equidad: la pobreza por ingresos cayó del 38% al 8,5%, la desigualdad se redujo y mejoraron los indicadores de salud, educación y vivienda. Estos resultados reflejan que, durante esos 30 años, el crecimiento económico estuvo acompañado de una mejoría sostenida en las condiciones de vida de la población.

Sin embargo, la situación cambió en los años recientes. Los indicadores económicos y sociales muestran un deterioro generalizado respecto de 2019, incluso sin considerar los efectos extraordinarios de la pandemia de COVID-19. La productividad se ha estancado, el mercado laboral se ha debilitado, la inversión ha perdido dinamismo y la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. En conjunto, los avances alcanzados en las décadas previas parecen haber dado paso a una etapa de estancamiento y pérdida de impulso estructural.

En 2022 y 2023 la actividad económica chilena sufrió un desempeño mucho más débil que el promedio regional e internacional. El estancamiento fue particularmente evidente en 2023, cuando la economía creció apenas 0,5%. Esto obedece, en gran medida, a contracciones o resultados muy débiles en productividad e inversión.

Aunque en 2024 se observó un repunte con un crecimiento de 2,6%, este nivel sigue siendo insuficiente para desencadenar un verdadero impulso sostenido. Las proyecciones para 2025–2026 no traen mayores esperanzas: el actual gobierno terminaría con un crecimiento promedio estimado en 1,8%, lo que lo posicionaría como el segundo peor (junto con Bachelet II) desde el retorno a la democracia.

Este debilitamiento se ha traducido en un deterioro del mercado laboral, especialmente evidente desde 2023, con una creación de empleo insuficiente que ha derivado en tasas de desempleo persistentemente altas. Parte importante del deterioro se concentra en el sector privado formal, que sigue mostrando una capacidad limitada para generar puestos de trabajo, en parte por el incremento que han registrado los costos laborales.

En cuanto al bienestar social, si bien los datos más recientes muestran una reducción de la pobreza y la desigualdad, un análisis más detallado revela que estos avances se deben en gran medida al aumento de los subsidios estatales originados por la pandemia y otras políticas transitorias, como los retiros de fondos provisionales. Por otro lado, los ingresos autónomos han disminuido respecto a 2017, lo que indica una falta de aumento en la capacidad de los hogares para generar sus propios ingresos.

Otra dimensión que ha mostrado un deterioro considerable es la seguridad ciudadana. De acuerdo con diversas encuestas, esta se ha consolidado como la principal preocupación de la población, con niveles de inseguridad y temor al delito históricamente altos. Este fenómeno se manifiesta no solo en la percepción, sino también en la realidad delictual: los homicidios han aumentado, en particular aquellos con imputados desconocidos junto con otras manifestaciones delictivas asociadas al crimen organizado. En consecuencia, existe un amplio consenso político y social en torno a que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en su historia reciente.

En este contexto, en el que Chile enfrenta una situación más desfavorable que hace seis años en múltiples ámbitos (Tabla 2), especialmente en materia de seguridad, las prioridades de la ciudadanía han experimentado un cambio profundo. Según la Encuesta CEP 2025, el “orden público” y la “seguridad de las personas” se consolidan como los temas que deben ocupar el primer lugar en la agenda nacional para la próxima década, junto con el alto crecimiento económico.

De hecho, el estudio muestra que, en comparación con hace una década, ambas preocupaciones aumentaron en 20 puntos porcentuales en la lista de prioridades, desplazando a un tercer lugar la igualdad de oportunidades, que en 2014 encabezaba las principales demandas ciudadanas.

Este cambio evidencia que las demandas sociales que originaron el estallido social han pasado a un segundo plano. Así lo reflejan los dos procesos constitucionales fallidos y los resultados de la encuesta CEP 2024, donde el apoyo al estallido cayó a mínimos históricos: el 50 % de los encuestados lo considera “malo o muy malo” para el país.

En síntesis, Chile no solo enfrenta una situación peor en numerosos ámbitos respecto del período previo al estallido social, sino que, además, las preocupaciones ciudadanas han cambiado y se han vuelto más complejas. La seguridad y el orden público desplazaron a las antiguas demandas sociales como eje de la agenda nacional. La conclusión es clara: el estallido social sigue envejeciendo mal.

Tabla 2: Evolución de indicadores socioeconómicos para Chile, 2019 vs. cifra más reciente.

	2018	2024
PIB (Var. a/a; %)	4,0	2,6
Inversión privada (Var. a/a; %)	6,5	-1,4
Índice de Productividad PTF-D (Var. a/a; %)	0,8	0,0
Tasa de desempleo (%)	7,1	8,5
Tasa de ocupación (%)	58,7	56,6
Tasa de participación laboral (%)	63,2	61,6
Balance Estructural (% del PIB)	-1,5	-3,2
Deuda Bruta Gobierno Central (% PIB)	25,8	42,3
Tasa de homicidios (Número cada 100 mil habitantes)	4,4	6,0
Índice de temor (*)	19,6	24,3
Percepción de inseguridad (%)	76,8	87,7

Notas: (1) El “Índice de temor” corresponde al que elabora la Fundación Paz Ciudadana que mide el porcentaje de personas con alto temor a la delincuencia y se comparan específicamente las cifras de septiembre de 2019, septiembre de 2024 y octubre de 2025. (2) La “Percepción de inseguridad” es medida anualmente por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y corresponde al porcentaje de las personas perciben que, a nivel nacional, la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses.

Fuente: Elaboración propia.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes, C., & Larraín, F. (2024). *El estallido envejece mal*. Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC).
- Dirección de Presupuestos (2022). Cumplimiento de las metas de regla fiscal en Chile: Revisión histórica.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Informe de Desarrollo Social 2021.
- Subsecretaría de Prevención del Delito (2025). Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile. Centro para la Prevención de Delitos Violentos.



clapesuc



@clapesuc



@clapes_uc



Clapes UC



ClapesUC



www.clapesuc.c